SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 1815

11 de enero de 2011

Presentada por el señor *Seilhamer Rodríguez*

Referida a

RESOLUCIÓN

Para ordenar a las Comisiones de Urbanismo e Infraestructura; y Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas del Senado de Puerto Rico, a realizar un estudio abarcador sobre la efectividad de la Ley Núm. 69 de 11 de agosto de 2009, conocida como Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar que cumpla con los propósitos por los cuales fue aprobada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 69 de 11 de agosto de 2009, conocida como Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, se aprobó con el propósito de establecer una tarifa fija de los servicios de agua y luz para los clientes de los residenciales públicos y disponer para el establecimiento de un plan de pago fijo para todo cliente con balances vencidos tanto en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ello debido a la conocida falta de capacidad de los habitantes de los residenciales públicos para pagar mensualmente los servicios de agua y energía eléctrica.

La Exposición de Motivos de la citada Ley Núm. 69 menciona que de las 68,586 unidades de vivienda en residenciales públicos de la Isla, 64,281 reflejaban deudas en los registros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que representa el 93% del total de unidades. En dólares y centavos, la AEE refleja un total de \$8,116,270.48 en deudas correspondientes a clientes que residen en residenciales públicos,

mientras que la AAA mantiene deudas que ascienden a \$14,106,384.33 para el mismo sector de la población.

Las cifras antes mencionadas resultan alarmantes, particularmente ante la crisis económica que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico. Ciertamente, las corporaciones públicas no son ajenas a la precaria situación fiscal. Es sabido que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha contemplado una tarifa fija para todos los consumidores residenciales de los servicios de la entidad gubernamental.

Ante este cuadro y transcurrido más de un año desde su aprobación, el Senado de Puerto Rico considera necesario y meritorio realizar un estudio abarcador sobre la efectividad de la Ley Núm. 69 de 11 de agosto de 2009, conocida como Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, a fin de identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes para garantizar que cumpla con los propósitos por los cuales fue aprobada.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Urbanismo e Infraestructura; y de Banca,
2 Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas del Senado de Puerto Rico, a realizar un
3 estudio abarcador sobre la efectividad de la Ley Núm. 69 de 11 de agosto de 2009, conocida
4 como Ley Especial de Justicia Tarifaria de Utilidades para Residenciales Públicos, a fin de
5 identificar aquellas acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y convenientes
6 para garantizar que cumpla con los propósitos por los cuales fue aprobada.

7 Sección 2.- Las Comisiones deberán rendir un informe que contenga sus hallazgos,
8 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y administrativas que deban
9 adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, no más tarde de noventa (90) días,
10 después de aprobarse esta Resolución.

11 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.